

JORGE RÍOS  
San Gil

Crece la alarma por posible intervención en San Gil

# Acuasan vuelve a cerrar en rojo

La empresa de servicios públicos de San Gil completa otro año con pérdidas y el Concejo suspendió el debate de control político en el que se esperaba escuchar explicaciones. Veedurías y expertos advierten déficits, cuentas por pagar y riesgos por sanciones.

¿Será intervenida? Esa es la pregunta que ronda entre algunos sangileños sobre el futuro de la empresa de servicios públicos de San Gil, que volvió a cerrar, por segundo año consecutivo, con cifras en rojo.

Las explicaciones sobre la situación financiera de la empresa no llegaron en el debate de control político citado por el Concejo Municipal, que se suspendió y quedó pendiente de reprogramación, sin fecha confirmada para las próximas sesiones ordinarias de mayo. Tampoco llegaron por parte de la gerente de la empresa, Diana Patricia Rojas Porras, quien fue consultada por esta redacción y solicitó plazo para entregar sus declaraciones.

Tras un 2024 con cifras en rojo y con observaciones de entes de control, los números de la empresa para 2025 volvieron a encender las alertas. Según el informe financiero cargado por la empresa en la página de la Contaduría General de la Nación, CGN, el déficit contable, o mejor, las pérdidas, fueron de \$1.326 millones.

“El balance contable nuevamente presenta una pérdida considerable y un déficit presupuestal altísimo; profundizándose la problemática de cuentas por pagar por más de \$5.000 millones, sin existir recursos suficientes en caja para solventar su pago”, señala una denuncia presentada ante la Contraloría por la veeduría Colombia Digna y Transparente.

Este indicador revela pérdidas y una posible falla de planeación presupuestal, explicó Juan Alberto Rodríguez Forero, contador público y especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria.



Suministrada / VANGUARDIA

Una de las preocupaciones es que de continuar los malos resultados la empresa sea intervenida.

Tras revisar la información contable y la ejecución presupuestal disponible, la veeduría advierte que también se evidenciaría un déficit presupuestal por \$1.461 millones: es decir, que la empresa habría gastado más de lo que ingresó por los servicios que presta como entidad 4A (acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público/gestión energética). La veeduría señala que “se sigue gastando más de lo que ingresa, a pesar que en el año 2024 en el informe de la contraloría se evidenció un hallazgo administrativo de déficit por 300

millones de pesos para plan de mejora en el 2024, año en el que el déficit presupuestal aumento a \$1.883 millones”.

Una de las preocupaciones es que, de continuar los malos re-

**En el balance contable, la empresa también indicó que las pérdidas de 2024 serían superiores a las reportadas inicialmente.**

sultados, la empresa pueda enfrentar una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

“Lo más preocupante es que se comprometan recursos mal planificados, que no existen; no están siendo responsables en la planeación presupuestal”, añadió el profesional.

En el informe, el revisor fiscal Fabio Millán Morales indicó que se identificaron “deficiencias en la contabilidad por componente, en la asignación de costos operativos entre los componentes de acueducto, alcantarillado y aseo.

Esta situación genera una distorsión en la información financiera por componentes, lo cual dificulta la evaluación de la eficiencia operativa individual de cada servicio y podría representar un riesgo de cumplimiento frente a los marcos regulatorios de costos y tarifas vigentes”.

Desde la veeduría advirtieron que, pese a la delicada situación financiera de la empresa, se seguirían presentando inconsistencias que dejan dudas sobre el manejo de recursos.

Entre las denuncias, sobresale que la empresa no habría pagado a tiempo a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) la tasa retributiva por vertimientos. Según la veeduría, esos recursos, con destinación específica, debían girarse oportunamente a la autoridad ambiental.

La veeduría también menciona otros posibles costos derivados de sanciones, multas o procesos laborales. En este caso puntual \$30 millones en intereses a la CAS.

Otro de los ejemplos sobre la mala administración sería la multa pagada a la anterior gerente anterior, Karen Cediell, por no liquidarla a tiempo, lo que le habría costado a Acuasan \$12 millones, así como una sanción por \$235 millones que se pagó en 2025 a la Superintendencia de Servicios Públicos por malos manejos.

## La zona del derrame de pozo Lisama 158 cambia de rostro

LESLEY CIFUENTES  
Barrancabermeja

Ocho años después de la emergencia ambiental ocurrida cerca del pozo Lisama 158, la zona muestra una imagen distinta a la del territorio cubierto de petróleo que impactó al país en 2018. Hoy, el área donde se registró el afloramiento es presentada por Ecopetrol como la Ecoreserva La Tayra-Lizama: un bosque joven que busca consolidarse como símbolo de restauración ambiental en el Magdalena Medio.

Pero para entender lo que es hoy, es necesario recordar lo que ocurrió.

El 2 de marzo de 2018 comenzó la contingencia. En un predio cercano al pozo Lisama 158 se registró un afloramiento incontrolado de crudo y gas desde el subsuelo. Durante varios días, el hidrocarburo emergió sin contención total

y se desplazó por drenajes naturales hasta alcanzar la quebrada La Lizama y el caño Muerto, afluentes del río Sogamoso.

Las cifras oficiales estimaron el derrame en aproximadamente 550 barriles de crudo. Además, más de 2.400 animales, entre peces, aves, reptiles y mamíferos, murieron como consecuencia de la contaminación. Las imágenes de fauna cubierta de petróleo y cuerpos de agua ennegrecidos se convirtieron en símbolo de uno de los episodios ambientales más críticos asociados a la industria petrolera en la última década en Colombia.

Para las comunidades rurales hubo restricciones en el uso del agua de las fuentes afectadas, impactos en actividades como la pesca y la agricultura, y atención a familias en medio de la incertidumbre mientras avanzaban las

labores de contención y limpieza.

El caso Lisama 158 abrió además un debate nacional sobre la gestión del riesgo en la industria petrolera, particularmente en lo relacionado con el monitoreo técnico, el mantenimiento de pozos inactivos o en abandono y la capacidad de respuesta ante afloramientos no controlados.

Hoy, en el mismo terreno donde en 2018 el crudo cubrió suelos y humedales, crece la Ecoreserva La Tayra-Lizama. De acuerdo con Ecopetrol, allí se han sembrado más de 9.000 plántulas de 48 especies nativas como parte del proceso de rehabilitación de la cobertura vegetal. Abarcos, guayacanes, ceibas bongas, caracoles y guaduas hacen parte del nuevo bosque.

“Pasamos de un monocultivo de palma a un hermoso y extenso bosque de muchas especies,



Suministrada / VANGUARDIA

Hoy, el área afectada en 2018 forma parte de la red nacional de ecoreservas del Grupo Ecopetrol y mantiene procesos de restauración y seguimiento ambiental.

maderables, nativas, ellas mismas se están reproduciendo. De manera que hoy hemos sembrado un arbolito, una plántula pequeña, diminuta, pero que esperamos que dure 100 o más años como lo que es que esperamos que suceda aquí en respuesta al ecosistema de un trabajo arduo, articulado con las autorida-

des, con las comunidades”, expresó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

La empresa también reporta avances en biodiversidad: más de 1.300 registros de fauna silvestre pertenecientes a 38 especies, entre ellas monos cariblanco, ocelotes, armadillos, mapaches y guacharacas.